

Comentarios Resolución que permite asignar o modificar las obligaciones de los PRST en situaciones de emergencia declaradas, para ampliar la cobertura y mejorar la cobertura del servicio de telecomunicaciones Móviles.

Veeduría TIC de Colombia <veeduriaticdecolombia@gmail.com>

Mar 27/06/2023 20:52

Para: obligacionesenemergencias <obligacionesenemergencias@mintic.gov.co>; Mintic Responde <minticresponde@mintic.gov.co>

Con un saludo, enviamos nuestros aportes al proyecto en comento.

Comentarios del proyecto en general

Nos preocupa la premisa del ministerio bajo la cual debido a una situación no predecible ni controlable, como lo es una emergencia, y la cual tiene natural vocación de transitoriedad, se realicen modificaciones sobre obligaciones que tienen vocación de permanencia, que tienen impacto en las proyecciones de ingreso de mediano y largo plazo y que, en últimas, lo que hacen es contrariar la naturaleza de las obligaciones de hacer generando nocivas ineficiencias.

Hay varios riesgos jurídicos y económicos que no se advierten en el proyecto y que pueden generar un daño antijurídico como parte del actuar del ministerio.

Una localidad ya cubierta que sea declarada en emergencia podría ser sujeto de cambio. O una localidad cubierta que entre en emergencia de manera parcial podría perder la totalidad del servicio dado que con base en un elemento no predecible ni controlable se afectó la continuidad en la prestación del servicio de manera definitiva.

Recordemos que la doctrina jurídica alrededor de las obligaciones de hacer ha resaltado que hay otros instrumentos idóneos para la prestación de servicios de comunicaciones bajo situaciones de emergencia, incluso la asignación directa de permisos. Al contrariar la doctrina se están generando graves daños tanto a los operadores (PRST-IMT) como a las comunidades.

Solicitamos que el ministerio reconsidere los fundamentos del presente acto administrativo so pena de incurrir en peligrosas malversaciones de recursos públicos, por ejemplo, mediante la depreciación arbitraria de equipos de radiobases, o mediante la erosión del costo de capital empleado en una obligación de hacer.

Comentarios específicos

Art 1. El objeto contraría los preceptos básicos de la Ley 1341 y desconoce que en situaciones de emergencia ya hay medios administrativos para gestionar los problemas de comunicaciones. En el proyecto actual se está desbordando la situación jurídica para subjetivizar las obligaciones de hacer, de facto.

Art 3. Par 1. El texto carece de sentido lógico además de establecer una premisa vacía en términos de la disponibilidad del servicio en un área geográfica. En la práctica, lo que la Ley favorece es la continuidad en la prestación del servicio, el aumento de la disponibilidad es un término sui generis que exorbita la regulación propuesta y genera riesgos administrativos.

Art3. Par 2. Insistimos que se está modificando una obligación con vocación de permanencia con base en una situación temporal e incontrolable, no hay un sustento lógico para esto.

Art3. Par4. Los tiempos administrativos para la fijación de obligaciones de hacer no concuerdan con los tiempos de atención para la atención de una emergencia. Tampoco tiene sentido el ámbito de aplicación del párrafo toda vez que pareciera exorbitar la discrecionalidad administrativa del ministerio. Ignorar la reglamentación de obligaciones de hacer consignada en la REs 2715 de 2020 genera un altísimo riesgo fiscal y legal para el ministerio. Prácticamente es un mico que faculta modificaciones y asignaciones de obligaciones a dedo sin que medie mecanismo objetivo de cuantificación.

Art 4. No determina ningún mecanismo de indexación lo cual en términos de moneda corriente puede generar un saldo negativo para el Estado o un posible daño antijurídico derivado de la depreciación de equipos y planta involucrados en las obligaciones de hacer.

Art 6. Num 2: Es un hecho indeterminado y altamente subjetivo que el ministerio no define dentro del acto administrativo. No es claro a qué se refieren cuando hablan del área de la zona declarada en situación de emergencia, parecieran no tener claros los entornos sociopolíticos del DANE y se genera un riesgo de arbitrariedad en cuando a las localidades modificadas.

Art 6. num 3. Este artículo, como la resolución misma, desconoce la realidad del territorio en cuanto al despliegue de infraestructura. Mientras se surte todo el proceso administrativo probablemente ya cesó la situación de emergencia.

Finalmente, nos preocupa la falta de rigor jurídico y económico en el proyecto en comento y solicitamos al Ministro MAuricio Lizcano que refuerce dicho elemento toda vez que hay un evidente riesgo administrativo de expedirse este acto como salió publicado.

Equipo VTC